



"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría

Editorial

2

El efecto Saca y el efecto Schafik

Político

5

Muchas dudas sobre las elecciones (II)

Político

7

El presidente de ARENA y su visita a Washington

Económico

9

Consideraciones sobre la propuesta legislativa del PDC

Social

11

Oferta electoral de ARENA

Reporte IUDOP

13

Lo peor está por venir

Reporte IDHUCA

15

El gurka guanaco

Lo peor está por venir

A juzgar por los hechos de violencia reportados en lo que va del año y por las cada vez más desatinadas respuestas gubernamentales para combatirla, la grave situación de violencia continuará y, en el peor de los casos, se agravará en el 2006. La escandalosa cifra de 55.5 homicidios por cada cien mil habitantes reportada en el 2005, considerada la más alta del continente, es el reflejo de la alarmante situación que azota al país.

Lo más grave del caso es que no hay visos de que se formulen e implementen estrategias serias y sostenibles para controlar con efectividad la criminalidad. En enero recién pasado, se reportaron 320 homicidios, esto es, un promedio diario de 10.3, superando al registrado en los meses de enero de 2004 y 2005, lo que indica que no hay resultados concretos en la reducción de la violencia; más bien, se observa un sostenido incremento que no ha parado desde el 2003, año en que iniciaron los Planes Mano Dura. De la misma manera, a juzgar por las últimas acciones y campañas presentadas por el gobierno para combatir el accionar delincuencia, el nombramiento de Rodrigo Ávila como director de la PNC no traerá cambios sustanciales en las políticas de seguridad, pues en los primeros meses de su desempeño no hemos visto un giro sustancial en la estrategia para el combate de la criminalidad; más bien se ha acentuado el despliegue publicitario de campañas rimbombantes que caracterizaron a los dos directores anteriores, como la Cruzada Nacional contra la Delincuencia, presentada en enero por el presidente de la República y las autoridades de Seguridad Pública que tiene entre sus actividades centrales la localización de los delincuentes más buscados, el fortalecimiento de la capacidad investigativa de la policía y el establecimiento de la coordinación entre órganos de justicia, tal como lo establece la Constitución en la persecución del delito.

Curiosamente, hace diez años, durante la administración de Calderón Sol y con Rodrigo Ávila a la cabeza de la PNC, en respuesta al incontenible auge delincuencia que azotaba al país, el gobierno lanzó una campaña del mismo nombre con similares componentes, por lo que a juzgar por lo presentado en la última versión de esta campaña parece ser "más de lo mismo" y esto se evidencia cuando en la práctica no se toman acciones

contundentes para controlar eficazmente el crimen, como la de reforzar el presupuesto asignado a la policía. Se promete mejorar la investigación del delito, pero no se asigna un refuerzo presupuestario para la PNC, que permita, entre otras cosas, poner a funcionar el Laboratorio de Investigación Científica del Delito, lo que refleja que, hasta hoy, la centralidad que desde el discurso oficial y en las campañas preelectorales del partido ARENA se le otorga a los temas de seguridad, no se ha traducido en un aumento de recursos financieros para el organismo encargado de proteger y garantizar la seguridad pública, quien contrario a lo esperado, ha visto reducido en 14 millones su presupuesto institucional desde 1999.

En vez de fortalecer la capacidad investigativa de la policía, más bien en los últimos años, se han tomado acciones orientadas a su debilitamiento como la desarticulación de la División de Investigación Criminal (DIC), al desvincular de las delegaciones policiales, las unidades de investigación, de tal suerte que los mismos policías reconocen que ahora se cuenta con Unidades de Investigación (UDINES) totalmente inoperantes. Por otra parte, la coordinación entre Policía, Fiscalía y Órgano Judicial continúa teniendo un carácter más formal; pese a la gravedad del problema delincuencia, en la práctica más que una coordinación entre ellas, se ha generado un enfrentamiento estéril a la hora de deducir responsabilidades del incremento delincuencia; por ejemplo en la mayoría de los casos, la Fiscalía no ejerce la dirección funcional del delito; jueces y fiscales hacen por lo general un trabajo separado. Es frecuente, de acuerdo a operadores judiciales, que la policía recoja pruebas sin autorización fiscal, esconda información al propio fiscal y que los fiscales no intervengan en las investigaciones, basándose muchas veces en lo que la policía dice en las actas, haciendo que haya una notoria disparidad y descoordinación al momento de presentar los casos ante el juez. Las falencias antes señaladas hacen que finalmente el mismo fiscal opte por solicitar el sobreseimiento de los acusados, reconociendo con ello que muchas investigaciones carecen de sustento, situaciones que son por lo general desconocidas por la población y esto debido a que el Ejecutivo necesita encontrar, incluso a costa del debilitamiento de

reporte IUDOP

la institucionalidad del Órgano Judicial, un chivo expiatorio que cargue con la responsabilidad de la franca incapacidad que ha tenido para controlar el flagelo delincencial. Las últimas campañas de ataque y desprestigio contra los jueces por parte de funcionarios de Gobernación, así como algunas de las últimas propuestas que atentan contra la independencia jurisdiccional de los jueces, son muestra de que, a pesar del discurso, no existe una auténtica voluntad para trabajar concertadamente.

A su vez, tal y como sucedió durante las administraciones de Sandoval y Meneses, la Policía continúa con la creación de una serie de unidades y divisiones elites especiales como el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), presentado como una unidad que combina acciones encubiertas y operaciones de choque, cuya misión especial es contener el accionar de las pandilleros. ¿Cuántas más de éstas se han creado en los últimos años, duplicando en apariencia la labor de otras creadas con los mismos fines sin ninguna efectividad? (Grupos Antipandillas-GTA, División Antihomicidios-DIHO, etc.)

Sin embargo, parece que los actos de desesperación entre los que conducen la seguridad pública están incrementándose al no lograr por los mecanismos legalmente establecidos el control de la criminalidad. Por ejemplo, en el caso del GOPES, residentes en comunidades con presencia de pandillas advierten que miembros de esta unidad están llegando a hacer redadas de pandilleros, a quienes golpean, para luego dejarlos libres. Curiosa técnica de inteligencia policial para esclarecer los delitos de homicidios y extorsiones supuestamente atribuidos a pandilleros.

Pareciera ser que a los altos funcionarios de las áreas de seguridad se les están agotando los slogan y ahora están ensayando nuevas estrategias publicitarias cada vez con mayor grado de perversión, basadas como siempre en la campaña del miedo, que tan efectivas han resultado ser en sociedades del miedo como la nuestra, donde la gente vive presa del temor y la incertidumbre por el clima de inseguridad y delincuencia que impera. En esta línea, es lamentable y repudiable la supuesta campaña de prevención de pandillas impulsada en las últimas semanas por el Ministerio de Gobernación en los medios escritos y televisivos que se homologa a la campaña que en similares términos está haciendo el partido ARENA, donde se utilizan imágenes de pandilleros para sembrar

temor, generando con ello un mayor fortalecimiento de las pandillas, al otorgarles publicidad y difusión gratuita, lo cual además de darle legitimidad a las pandillas, los pone al servicio de intereses partidarios, pues, tal y como lo menciona un artículo periodístico, las pandillas están haciendo voluntaria o involuntariamente campaña política a favor de ARENA.

A su vez, es sumamente grave que en el marco del lanzamiento de la segunda fase del Plan Escuelas Seguras, el director de la PNC aproveche para hacer una campaña basada en el miedo, mostrando a estudiantes del Instituto Técnico Industrial (INTI) una bolsa negra donde envuelven los cadáveres, para ilustrar con ello el destino que podrían tener los jóvenes si se ven involucrados en pandillas, obviando que a muchos jóvenes les guía el gusto por la provocación, lo que significa que cuanto más prohibida o sancionada socialmente es alguna conducta, más atractiva resulta ser para muchos de ellos; exacerbando probablemente con este tipo de campañas una nueva escalada de violencia estudiantil como la que se tuvo hace algunos años, al generar con estas acciones provocación hacia las pandillas; muestra del resultado nefasto de esta campaña es la muerte de un joven del mismo Instituto, registrada un día después del inicio de la campaña, a manos de estudiantes del Instituto Nacional de Soyapango, lo que evidencia el efecto adverso de estas medidas.

Ojalá que este hecho y todo el caos reinante en la seguridad pública puedan finalmente hacer reflexionar a las altas autoridades del ramo de seguridad para diseñar de forma más responsable y ética sus estrategias de publicidad, las cuales dan al traste con programas institucionales de prevención de violencia que el propio Ministerio de Educación y otras áreas, incluso de la misma policía están echando a andar en algunos centros educativos, basadas en educación en responsabilidad, en el fortalecimiento de habilidades para la vida como factores de protección de la violencia juvenil. De continuar con este tipo de campañas en los centros educativos, no es remoto que, tal y como sucedió con las pandillas a partir de los Planes Mano Dura, en vez de reducirse la violencia estudiantil, esta se agrave y complejice en un corto plazo. No cabe duda que, en esta dirección, lo peor está por venir.